

Seguridad Ciudadana y Posconflicto en Bogotá: Dilemas y Desafíos

Carmen Maritza González Manrique.

Marzo 2016.

Universidad Militar Nueva Granada.
Especialización en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa.
Colombia, Bogotá D.C

Copyright © 2016 por Carmen Maritza González Manrique. Todos los derechos reservados.

Una de las principales motivaciones para desarrollar un artículo en torno a la “seguridad ciudadana y el postconflicto en Bogotá”, radica en el reconocimiento que hacen organismos internacionales, el Gobierno Nacional, las administraciones locales y la misma ciudadanía, frente a los múltiples problemas que en materia de inseguridad y criminalidad se pueden presentar en nuestro país, una vez culmine el proceso de paz que actualmente se adelanta con las FARC.

Desde esa perspectiva, buscando entender la dinámica y alcance de este tipo de procesos, se realiza un estudio de caso en torno al impacto que tendría el postconflicto sobre la seguridad ciudadana en Bogotá, a partir de un marco conceptual básico y unos planteamientos teóricos enmarcados alrededor de conceptos como el de seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad humana y postconflicto. Así mismo, se examina el tránsito que han tenido en Bogotá las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en las últimas dos décadas, el impacto que como fenómeno de inseguridad y criminalidad tendría el postconflicto. Finalmente, el artículo devela la connotación sistémica y multicausal que conlleva un escenario de postconflicto y el papel que en materia de seguridad ciudadana debe cumplir Bogotá frente al tema.

Palabras claves: seguridad ciudadana, inseguridad, postconflicto, criminalidad

Los problemas de inseguridad ciudadana en la mayoría de urbes del mundo presentan un origen multicausal. Mientras hay quienes dan un papel protagónico a la pobreza y a la desigualdad como principales factores generadores de criminalidad e inseguridad, otros como Peter Gizewski y Thomas Horner-Dixon, señalan que “el crecimiento urbano, al combinarse con variables como la crisis económica y el debilitamiento de la acción del Estado, también puede contribuir a la inseguridad y el delito” (Peter Gizewski, 2008).

De igual manera, pero desde una perspectiva histórica y social, se ha identificado escenarios donde confluyen factores adicionales de inseguridad, diferentes a las dinámicas multicausales tradicionales.

En el caso particular de Colombia, el conflicto interno que vive desde hace más de cincuenta años, involucra diversos actores, afectando su estructura política, social y económica, por ende, perjudicando a todos los niveles de gobierno, instituciones y sociedad. De ahí que la confrontación armada Este fenómeno ha dejado en Colombia al menos 220.000 personas muertas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012 (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2013) represente una de las principales causas de inseguridad en el país y por tanto, un desafío para el Estado, sí se tiene en cuenta que ad portas de un escenario de postconflicto, fenómenos ya presentes como la desigualdad social, la pobreza, la falta de empleo, los puntos de miseria, el desplazamiento, el microtráfico, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, la criminalidad asociada al narcotráfico, los rezagos del paramilitarismo, la delincuencia organizada urbana y las bacrim, podrían perpetuarse y elevar su nivel de consolidación, si no se cuenta con una política pública integral que responda a dichos desafíos.

Bogotá no es ajena a esta preocupación nacional, no sólo por tratarse del principal escenario de recepción de desplazados, víctimas de la violencia, víctimas de la pobreza y desigualdades sociales, sino también, por constituir uno de los principales nichos de estructuras y manifestaciones criminales.

Es decir, estamos frente a factores y condiciones de alta vulnerabilidad, que no sólo reclaman una visión en prospectiva del complejo escenario que se avecina, sino también, la construcción de una estrategia integral que haga frente a las nuevas exigencias, que particularmente en materia de seguridad ciudadana, reclama la sociedad en general.

v

De tal manera que no puede perderse de vista que una transición exitosa del conflicto hacia la paz, no es un producto del azar y mucho menos cuando se habla de temas tan sensibles como la seguridad. Por el contrario, mi hipótesis al respecto, es que la seguridad ciudadana debe ser el resultado del diseño e implementación de una cuidadosa política pública, que combiné seguridad y postconflicto, bajo una visión y respuesta integral de los fenómenos criminales, sociales, políticos, urbanísticos, culturales y económicos.

Bajo ese entendido y de cara al postconflicto en nuestro país, conscientes de los fenómenos de inseguridad y criminalidad que el mismo traerá consigo, surge la imperiosa necesidad de revisar y analizar, ¿Cuál sería el papel que debe cumplir la Política de Seguridad Ciudadana en Bogotá, frente a los desafíos que enmarcan un posible escenario de posconflicto?

Para dar respuesta a este interrogante, se partió de una propuesta metodológica que, utilizando el método inductivo, facilita la revisión y análisis de fuentes cuantitativas y cualitativas oficiales, no oficiales, provenientes de entidades, organismos, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. De igual manera, permite examinar investigaciones, documentos, reseñas, estudios, legislación y autores que hubiesen escrito sobre el tema, tanto en el ámbito internacional como nacional, con miras a seleccionar, aquellos documentos que pudiesen servir de apoyo conceptual y teórico a la investigación.

Tabla de contenido

I. Antecedentes	1
II. De la Seguridad Nacional a la Seguridad ciudadana: Aproximación Conceptual de Cara al Postconflicto:	3
III. La seguridad ciudadana en el contexto de Colombia:	5
IV. Bogotá y su tránsito por experiencias inconclusas en materia de seguridad ciudadana:	6
V. El postconflicto como fenómeno que impacta directamente la seguridad ciudadana:	7
VI. La seguridad ciudadana en Bogotá: la ruta del posconflicto:	9
VII. Conclusiones y desafíos:.....	12
Referencias.....	15

I. Antecedentes

Hablar de conflicto armado en Colombia, implica necesariamente retrotraerse a los años cincuenta y aun sin número de acontecimientos oscuros en nuestra historia “El documento, llamado 'BASTA YA: Memorias de guerra y dignidad', recoge las cifras y dinámicas de la confrontación armada y sus víctimas entre 1958 y 2012. De las 1900 masacres, 1.166 fueron responsabilidad de los paramilitares, 343 de los grupos guerrilleros, 295 de grupos desconocidos y 158 de la Fuerza Pública, además de 20 cometidas por grupos conjuntos entre paras y agentes del Estado. Según datos acumulados, que entre 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas 26 personas en el país como consecuencia del conflicto armado, mientras que cada doce horas fue secuestrada una persona. El periodo 1996-2005 fue el más crítico: una persona fue secuestrada cada ocho horas, y un civil o un militar cayó cada día en una mina antipersonal” (Centro Nacional de Memoria Historica, 2014).

Por ello, ad portas de un postconflicto, para nadie es un secreto que el aumento de la inseguridad, la criminalidad y la violencia urbana, serán parte vital de las preocupaciones y agendas de gobierno, tanto para los ciudadanos, como para las autoridades. La proximidad de un Acuerdo de Paz con las FARC y el ingreso de diversos actores dentro de un contexto de justicia transicional, ha provocado un interés inusitado, tanto en entidades gubernamentales, como en el sector privado y la sociedad civil, particularmente en lo que se refiere a la dinámica que tendrá la seguridad ciudadana en dicho contexto. De ahí el importante esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se viene haciendo para involucrar a las autoridades a nivel regional y local en la tarea de prever los dilemas y desafíos que un proceso de estas magnitudes puede generar, más aún, si se tiene en cuenta que un importante número de ciudades grandes y pequeñas del país, son las que con mayor rigor han recibido el impacto del conflicto.

Para citar sólo un ejemplo, tan sólo en veinticuatro de ellas se concentra el cincuenta por ciento de la población desplazada, esto es más de 6.8 millones de personas, casi la mitad de la población de Bogotá. Por ello la urgencia de que los entornos urbanos empiecen a mirar estrategias para un posible escenario sin guerra y cómo esto impactará la dinámica de las ciudades (Yamid Amat, 2014).

Precisamente, Bogotá, como capital de la República, principal área metropolitana del país y polo de desarrollo de la región central, en virtud del flujo de relaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales que históricamente ha construido con los departamentos, municipios y entornos rurales más próximos, no ha sido ajena al conflicto.

Según cifras divulgadas por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en los últimos 30 años se han reportado 21950 hechos de violencia en el marco del conflicto armado en Bogotá, siendo las localidades más afectadas Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. En el mismo sentido, se reconoce que hay presencia de BACRIM, FARC, ELN y diversas formas de delincuencia común y organizada asociada al conflicto, así como a la problemática social y económica que el mismo acarrea. Desde esa perspectiva y las resultas de los Diálogos de Paz en la Habana, la preocupación en la capital colombiana y sus autoridades se vuelve más latente, como quiera que se está hablando de factores y condiciones de alta vulnerabilidad, que de no enmarcarse dentro de una Política Pública focalizada e integral, podría traer nefastas consecuencias para nuestra capital.

II. De la Seguridad Nacional a la Seguridad ciudadana: Aproximación Conceptual de Cara al Postconflicto:

Existen dos enfoques que han incidido de manera determinante sobre la definición y comprensión del concepto de seguridad ciudadana: el primero es el de seguridad nacional, el cual empezó a adquirir relevancia después de las funestas consecuencias, tanto de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), como de la Segunda (1939-1945). “La seguridad nacional se encamina hacia la defensa de la soberanía nacional frente a las amenazas provenientes de otras naciones” (Font & Ortega, 2012, pág. 161) El segundo enfoque hace relación al concepto de seguridad de Estado, el cual se concentra en la protección de las instituciones estatales cuya estabilidad se pone en riesgo, por cuenta de factores internos como las guerrillas (Camacho & CEPAL, 2000).

Ya en época más reciente aparece el concepto de seguridad humana. Este concepto fue planteado por el PNUD y define que la seguridad tiene dos aspectos principales. En primer lugar, significa resguardo frente a amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión; y en segundo, protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2015)

Así las cosas, se desplaza el viejo enfoque de una seguridad centrada en proteger a los Estados, por otro que pone a las personas como sujeto central de la seguridad. Como se aprecia, los enfoques de seguridad nacional, seguridad de estado y de seguridad humana, tienen diferencias tanto en sus orígenes ideológicos, como en sus formulaciones teóricas y en sus ámbitos de intervención; sin embargo, también es posible identificar en ellos factores que se complementan. En tal sentido, el concepto de seguridad ciudadana involucra algunos elementos derivados de las aproximaciones descritas hasta el momento, aunque definirlo sigue siendo un ejercicio complejo debido a su matiz multicausal.

Para el contexto latinoamericano, el PNUD en línea con su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, postula que “la seguridad ciudadana es una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra el delito violento o predatorio” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2015, pág. 26).

Finalmente, en el marco del conflicto armado vivido en Colombia desde hace ya algunas décadas, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconflicto, definido éste como la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construir durante el conflicto, y que supone una recomposición de la sociedad, que incluye asuntos como la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos.

Para la Fundación Ideas para la Paz, un escenario de postconflicto, siguiente a los Acuerdos de Paz, debe estar cimentado en tres líneas estratégicas: 1. Justicia transicional, reintegración y reconciliación; 2. Gobernabilidad territorial para la paz, y 3. Educación y cultura de paz (Fundación Ideas para la paz, 2014)

En este sentido, el ex Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, hacía énfasis en que el postconflicto conlleva la creación de un nuevo clima para la consolidación de la paz: “vale decir las medidas destinadas a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2015). En consecuencia, el periodo de postconflicto armado supone llevar a cabo reformas institucionales sobre las estructuras involucradas en el conflicto con el fin de garantizar las condiciones para el mantenimiento de la paz (Camacho A. , 2010)

III. La seguridad ciudadana en el contexto de Colombia:

Consolidar los Acuerdos de Paz de la Habana, significará a futuro afianzar la Política Pública en materia de Seguridad Ciudadana. Las amenazas no desaparecen y se transforman para desafiar al Estado y la democracia. Las ciudades son protagonistas de esta adaptación que contribuye a la existencia de altos niveles de criminalidad y conflictividad social, inaceptables para una sociedad que avanza hacia el desarrollo. Prueba de ello son las altas tasas de homicidio que aún presentan las principales urbes del país, así como la presencia de bandas criminales, extorsiones, secuestros, homicidios, delitos contra la familia y de violencia sexual, entre otros. La criminalidad e inseguridad afectan la vida diaria de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables, y deteriora la calidad de vida pues genera miedo y desconfianza entre los ciudadanos, y nos impide gozar de los derechos que consagra nuestro sistema legal. La inseguridad es un fenómeno multicausal que puede manifestarse en contextos y acciones impredecibles.

En lo conceptual y operacional, la seguridad ciudadana en el país suele combinar nociones y enfoques propios de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. En este sentido, incluye aproximaciones y acciones en seguridad de diversa índole. Tanto el concepto de seguridad pública, como el de seguridad ciudadana, son productos recientes, ligados a procesos geopolíticos, regionales y nacionales. La seguridad pública y la seguridad ciudadana se diferencian en aspectos fundamentales. La primera se remite a la idea de orden público. Su esfera de acción, en este sentido se restringe al mantenimiento de dicho orden a través de mecanismos de control y reacción que buscan contrarrestar el crimen y la violencia frente a hechos puntuales, así como contrarrestar los efectos del conflicto armado y el narcotráfico. La segunda, se remite a la noción de calidad de vida en el día a día de los ciudadanos y propende por su mejoramiento, por lo que abarca un campo más amplio de acción. “La seguridad ciudadana privilegia la prevención, aunque no excluye acciones policivas de control. En ella, la contención del crimen y la violencia es un aspecto fundamental pero no único” (Escobar, 2001).

IV. Bogotá y su tránsito por experiencias inconclusas en materia de seguridad ciudadana:

Durante las últimas décadas las políticas formuladas e implementadas en Bogotá por los alcaldes Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, definieron un marco institucional que permitió consolidar lo que algunos analistas llamarán “el modelo Bogotá” de intervención en materia de seguridad y convivencia ciudadana (Camacho, Francisco, & Llorente, Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana. Armar la Paz es Desarmar la Guerra., 2004)

Bajo otra dinámica, las políticas de seguridad de los gobiernos de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, se enmarcaron teóricamente en el concepto de seguridad humana. A través de este enfoque se identificó como principales factores causantes de inseguridad en la ciudad, fenómenos como las redes criminales organizadas, las organizaciones armadas ilegales, el desplazamiento, los problemas de convivencia, los problemas originados por jóvenes, conflictos en el uso del suelo, conflictos ambientales y riesgos naturales, el expendio, distribución y consumo de sicotrópicos, la impunidad y los homicidios. La estrategia que definieron para enfrentarse a estos retos fue la política social.

Lo anterior permite identificar una diferencia fundamental entre los gobiernos de Mockus-Peñalosa y los de Garzón-Moreno-Petro, en términos de diseño de la política de seguridad ciudadana. Mientras los primeros definieron temáticas puntuales como la cultura ciudadana, la cultura de la legalidad, la cultura por la vida, la legitimidad institucional y la recuperación del espacio público, las políticas de las administraciones de izquierda establecieron un enfoque de seguridad humana, que incluyó ámbitos de análisis sobre las causas de la inseguridad en Bogotá, especialmente factores relacionados con las injusticias sociales (pobreza, desempleo, inequidad, etc.) y el conflicto armado interno (desplazados, reincorporados, víctimas).

V. El postconflicto como fenómeno que impacta directamente la seguridad ciudadana:

Las sociedades que consiguen superar parcial o totalmente sus conflictos armados internos, ya sea por la vía militar o a través de un proceso de negociación, enfrentan el desafío de evitar la reemergencia de la violencia en los años siguientes. En el caso particular de Colombia, la complejidad y la extensión de los retos del postconflicto, generan muchos desafíos y dilemas a su alrededor. Quienes creen que con la llegada del posconflicto nuestro país está próximo a transitar en un camino de sólo gozoso, están totalmente equivocados; esto es algo que al interior del Gobierno Nacional se sabe y preocupa.

De ahí la insistencia por configurar un nuevo paradigma de seguridad ciudadana en torno a las variables delictivas y criminales que emergerán o buscaran consolidarse a partir del postconflicto: dinámicas delictivas como el crimen organizado nacional y transnacional, la micro-criminalidad de la delincuencia común y la criminalidad medioambiental, sin duda alguna estarán determinadas por vectores como, el narcotráfico, la permanencia y consolidación de viejas realidades de inseguridad producidas por el contrabando, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el microtráfico, el pandillismo, el sicariato, la prostitución, la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la exclusión social, política y económica, entre otros.

Por otro lado, está la mutación en cuanto organizaciones delictivas y de modus operandi, que pueda surgir a partir de los miembros de la subversión que no hagan parte del proceso paz, tal como aconteció en su momento con los grupos paramilitares, cuyas estructuras, después de un proceso de desmovilización, dieron curso a organizaciones con una mayor disponibilidad de experiencia delincencial, principalmente por la inclusión de desmovilizados reincidentes o de un remanente de no desmovilizados. Aquí entrará en juego la capacidad real del Gobierno y los cabecillas de las FARC, para lograr que todos los integrantes del grupo subversivo abandonen las armas y se integren a la vida civil.

Tampoco se puede perder de vista, haciendo alusión aquí a la lucha que en su momento se libró contra los carteles del narcotráfico y grupos paramilitares, el vacío que del monopolio ilícito de las armas dejaron estas organizaciones en todas las áreas geográficas donde estas estructuras habían tenido influencia, lo que, por supuesto acontecerá también con las FARC, una vez se desmovilice. Adicionalmente, entraran en juego nuevos intereses de asociación criminal, que hasta hoy en día se viene dando entre las FARC, el ELN, las BACRIM, la delincuencia organizada y la delincuencia común.

Finalmente, otra de las mayores realidades radica en que el narcotráfico no terminará ni disminuirá con la firma de los Acuerdos de Paz, por el contrario, vendrá una guerra frontal por los territorios, rutas y clientes que, bajo un supuesto de transparencia en las negociaciones, abandonará definitivamente las FARC. Además, la eventual desmovilización masiva de guerrilleros, traerá consigo el síndrome de reincidencia y el aumento de un número significativo de mano de obra disponible para el crimen. “...Esto para significar que, en el corto plazo, mediante acciones sostenidas y sistemáticas, puede venir un proceso de desestabilización de la seguridad ciudadana” (Llorente & Rivas, 2004)

VI. La seguridad ciudadana en Bogotá: la ruta del posconflicto:

Una de las mayores prioridades para las sociedades que están en un contexto de postconflicto es el restablecimiento de la seguridad. El fin del conflicto interno armado cambiaría la agenda de seguridad del país, en la medida en que la principal amenaza a la seguridad nacional desaparecería, abriendo la posibilidad de re direccionar esa amenaza hacía la seguridad ciudadana. De ahí la importancia de pensar en Bogotá, no sólo como producto histórico, sino también como epicentro del postconflicto.

En los últimos años y de manera creciente, Bogotá han sido escenario de modalidades de crimen y violencia propias del conflicto armado, así como de aquellas formas ligadas al tráfico de drogas, la delincuencia urbana organizada, la presencia de grupos paramilitares y el accionar de las BACRIM. En materia de seguridad, si bien las tasas de homicidio en el país han tendido a descender en los últimos años, éstas en general siguen siendo alarmantes.

En términos reales, la seguridad en Bogotá ha aumentado y en comparación con otras ciudades, presenta un panorama alentador. Según un escalafón elaborado por la ONG Seguridad Justicia y Paz de México, hay ciudades colombianas en el ranking de las más peligrosas del mundo; Cali: 9; Palmira: 32; Pereira: 36; Cúcuta: 47 y Medellín 49. Bogotá no aparece en el listado. De acuerdo con el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaria Distrital de Gobierno, los homicidios, han presentado una disminución constante.

Después de estar, en el año 1999 en un 42 %, en 2015 alcanzan una de las cifras más bajas en los últimos tiempos: 17 %. Respecto a otros delitos como hurtos a residencias o personas, riñas, o violencia intrafamiliar.

Las cifras han mostrado una disminución sostenida. Por ejemplo, para el hurto de personas, uno de los temas más delicados y que más preocupa a los capitalinos, para 2015 se mantienen en más o menos 2.300 casos conocidos por las autoridades. No obstante, lo anterior, Bogotá sigue siendo considerada una ciudad sui generis en el contexto del conflicto armado interno, como quiera que ni es centro de la confrontación armada, ni sus actores han logrado penetrarla de manera significativa. (Acero, 2003)

Aun así, el Distrito Capital ha sido escenario de modalidades de crimen y violencia propias del conflicto; en este sentido, vale la pena subrayar que la paulatina urbanización de tales formas de violencia y delincuencia, también han estado acompañadas por la creciente semejanza entre aquellas modalidades delictivas asociadas con la llamada “delincuencia común” y aquellas modalidades propias del conflicto y la delincuencia organizada (Sánchez, 2003)

Para la capital del país, quizá uno de los mayores problemas que ha tenido que afrontar, como parte del conflicto ha sido el desplazamiento forzado, siendo la ciudad con el mayor flujo migratorio de población desplazada por causa de la violencia. Estamos hablando de colombianos que se han visto obligados a movilizarse y abandonar sus lugares de origen con la ilusión de iniciar nuevos proyectos de vida, desarrollar una actividad productiva y generar recursos para poder acceder a los servicios básicos, así como a una vivienda y condiciones de vida dignas y, lo que les es más importante, bajo condiciones de mayor seguridad para sus familias. Por supuesto, bajo un escenario de postconflicto, si bien es cierto ya no hablaremos de desplazados, el número de personas que lleguen a Bogotá, aumentará en cifras aun no posibles de calcular, generando eso sí un proceso social, económico y de seguridad para la ciudad.

A pesar de que en el Distrito Capital el desplazamiento es, en esencia, familiar e individual y las personas suelen dispersarse en diversos sectores del territorio, se observa una tendencia a su concentración en las localidades más pobres y afecta, de igual forma, a los municipios vecinos de la ciudad. Adicionalmente, esto terminará impactando el empleo, las ofertas de salud, educación y vivienda y el espacio público, entre otros.

Pero también hay que examinar el impacto del desplazamiento sobre la institucionalidad pública y la capacidad de respuesta del Distrito, así como el impacto frente a la nueva población que genere el postconflicto en Bogotá. Ahora bien, con mayor veraz el posconflicto se convierte en un importante desafío para nuestra capital, habida cuenta que se trata de la receptora tradicional de víctimas (unas 620.000) y que es muy probable que, tras la eventual firma de la paz con las Farc, reciba cerca de 4.000 desmovilizados. Tan sólo el año pasado las autoridades atendieron a cerca de 3.000 hombres y mujeres excombatientes de grupos armados ilegales (Barrera Osorio & Higuera, 2004)

En esa medida, el escenario de un posible posconflicto en Colombia, obliga al próximo alcalde de Bogotá, a tener en cuenta distintos aspectos que incidirían sobre la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital. Por ejemplo, ¿cuál será la política que en materia de seguridad ciudadana se implemente, no sólo para hacer frente a los acuerdos que se logren en la Habana, sino también, para articular la institucionalidad en la ciudad? De igual manera, a partir de la dinámica delictual identificada en el Distrito Capital, ¿en qué delitos o manifestaciones criminales deberá enfocarse las autoridades, ante un hipotético escenario de postconflicto?

VII. Conclusiones y desafíos:

La “seguridad ciudadana” es un tema que poco a poco ha venido adquiriendo un papel preponderante dentro de la agenda de los mandatarios locales. Prueba de ello lo constituyen las diferentes políticas que han integrado los Planes de Desarrollo Distrital durante las últimas décadas. Sin embargo, a pesar que en los discursos electorales el problema “seguridad” es el común denominador de quienes se postulan y llegan a gobernar, no en todos ha estado presente la idea de focalizar sus acciones en la materia.

El posconflicto donde el espectro de posibilidades de postconflicto no son escenarios de paz, sino de construcción de la paz. En consecuencia, pueden evolucionar positivamente hacia la paz duradera, o por lo menos, la paz estable, por el contrario, degradarse paulatinamente y derivar en nuevas situaciones de crisis e incluso de guerra. (Rivas Gamboa, 2001)

Más allá del posconflicto y perpetuación de la violencia: no puede equipararse la terminación del conflicto con el advenimiento de la paz ni con el restablecimiento de condiciones óptimas de seguridad”. (Sánchez F. S., 2003)

Esto exigirá una reconfiguración en las dinámicas de atención en materia de seguridad ciudadana. En primer lugar, los cambios que se den para atender a la población objeto de atención por parte del Estado, una vez esta se someta a un proceso de paz, la población con necesidades sociales existentes, la criminalidad existente y la criminalidad que llega Alrededor de este tema la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de los Andes publicaron en abril del 2002 el libro Preparar el futuro: Conflicto y post-conflicto en Colombia, en el cual se esboza el tema y se retoman algunas ideas del entonces secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros-Ghali, según el cual la construcción de la paz consiste en “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (Damert & Paulse., 2015).

Los fenómenos delictivos y estructuras criminales presentarán una mutación, no sólo en Bogotá. Podría darse que las Bacrim, la delincuencia común y la delincuencia organizada, cambien hacia estructuras con una mayor disponibilidad de experiencia delincencial, principalmente por la inclusión de desmovilizados reincidentes o de un remanente de no desmovilizados, que surgirían del proceso de negociación de La Habana. Pero, además por la permanencia en la capital de unas viejas realidades de inseguridad producidas por fenómenos como la territorialización de la inseguridad ciudadana.

Un eventual posconflicto también traerá como consecuencia, un vacío del monopolio ilícito de las armas y de la cadena delictiva en todas las áreas geográficas urbanas donde estos grupos guerrilleros actuaban a través de sus milicias.

La aparente o eventual salida de la guerrilla del mapa delictual, conllevará a una guerra territorial, particularmente de zonas deprimidas donde por décadas tuvieron presencia y hegemonía. La territorialización de la inseguridad ciudadana es uno de los más complejos desafíos que deberá enfrentar Bogotá, con miras a contrarrestar los efectos negativos que en materia de seguridad ciudadana podría traer el posconflicto. Bogotá necesita de una política pública integral y focalizada en materia de seguridad ciudadana, que le permita hacer frente al posconflicto y todos los fenómenos delictivos, sociales, políticos, económicos y laborales que alrededor del mismo se generen.

Estudiar los factores bajo esa dinámica, permite entender y explicar, el cómo se pueden llegar generar, arraigar y propagar dentro de un territorio considerado como crítico y/o vulnerable, complejas dinámicas de inseguridad. De igual manera, ayuda a demostrar que mientras algunas zonas urbanas reúnen condiciones de alta incidencia delictual, por ende, presentan una concentración estable de fenómenos de inseguridad, asociados a factores históricos, sociales, económicos y de política pública, “contribución relevante al análisis de la relación entre lugares y crimen tiene su origen en los trabajos de Shaw y McKay, 1942”. (Fedesarrollo , 2014)

Argumentaron que existen relaciones significativas entre niveles delictuales y determinadas condiciones sociales prevalecientes en la comunidad. Esta corriente dio paso al análisis de procesos sociales que tienen lugar a nivel de vecindarios y que podrían ser explicativos de la variación espacial del delito en las ciudades. otras, han consolidado importantes procesos de “territorialización” (Llorente & R. Escobedo, Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá. Bogotá, Alcaldía Mayor , 2013), a partir de variables ligadas a las condiciones geográficas del territorio y su entorno, al conflicto y desplazamiento interno, la corrupción de las autoridades, el microtráfico, la economía ilegal e informal, la pobreza, la exclusión social, la crisis de la institución familiar y la falta de oportunidades laborales.

Referencias

- Acero, H. (2003). *Acero, H. (2003). Experiencias en seguridad y convivencia. Bogotá, D.C.* . Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Gobierno.
- Barrera Osorio, F., & Higuera, L. (2004). *Violencia y delincuencia en contextos urbanos.* . Bogotá : Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Gobierno.
- Camacho, A. (2010). *Seguridad: ¿para la gente o para el Estado? ” Análisis Político (21): 70-81.*
- Camacho, A., & CEPAL. (2000). *La seguridad ciudadana: entre la prevención y el castigo.* Ed. CEPAL.
- Camacho, A., Francisco, & Llorente, M. V. (2004). *Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana. Armar la Paz es Desarmar la Guerra.* Bogotá: FESCOL-IEPRI-CEREC.
- Centro Nacional de Memoria Histórica . (2013). 50 años de confrontación armada. *Diario el Pais.*
- Centro Nacional de Memoria Historica. (2014). *Basta Ya: Memorias de guerra y dignidad.* Bogotá.
- Damert, L., & Paulse., G. (2015). *La Caída del Crimen en Bogotá: Una década de Políticas de Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana: Experiencias y Desafíos. Elementos para una criminología local.* . Secretaria de Gobierno de Bogotá : Red-URBAL.
- Escobar, M. (2001). *Evaluación Estratégica sobre la política de convivencia y seguridad urbana y las limitaciones institucionales a nivel nacional y territorial para su implementación.* . Bogotá : Ed. DNP.
- Fedesarrollo . (2014). *Encuesta Social de Fedesarrollo: Una Evaluación social de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali.* Bogotá, . Bogotá : Fedesarrollo. BID.
- Font, T., & Ortega, P. (2012). Seguridad Nacional, Seguridad Multidimensional en la seguridad ciudadana en Colombia. *Fuhem*, 161.
- Fundación Ideas para la paz. (2014). *Educación y cultura de paz.* Bogotá.
- Llorente, M. V., & R. Escobedo. (2013). *Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá. Bogotá, Alcaldía Mayor .* Bogotá : Secretaría de Gobierno.
- Llorente, M. V., & Rivas, A. (2004). *Violencia Homicida en Bogotá: Más que intolerancia.* . . Bogotá : CEDE Universidad de Los Andes.
- Peter Gizewski, T. F.-D. (2008). *Urban growth and violence: will the future resemble the past?* California: American Association for the Advancement of Science.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. (2015). *El enfoque de la seguridad humana.* San Jose: IIDH Instituto Interamericano de derechos humanos.
- Rivas Gamboa, A. (2001). *Cuidar a la gente: seguridad ciudadana y justicia. El conflicto callejón con salida.* Bogotá: 151-189. *Estrategia Nacional para la convivencia y la seguridad ciudadana.* . Bogotá .
- Sánchez, F. S. (2003). *Criminalidad Urbana. Documento CEDE-Paz Pública.* Bogotá : Facultad de Economía Universidad de los Andes.

- Sánchez, G. (2003). *¿Garrote o zanahoria? Factores asociados a la disminución de la violencia homicida y el crimen en Bogotá*. Bogotá: CEDE Facultad de Economía Universidad de Los Andes.
- Yamid Amat. (28 de Diciembre de 2014). *Victimas del conflicto armado en Colombia . El Tiempo .*